

Vallenar, treinta de junio de dos mil veintiuno

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado señor Mauricio Ortega Berríos, en calidad de mandatario judicial de doña Lorena Elizabeth Cataldo Muñoz, psicóloga, con domicilio en Avenida Nueva Providencia N°1363, oficina 702, Providencia, Santiago, deduciendo demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra de su ex empleador la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, representada por la señora Carmen Antonia Bou Bou, ambos domiciliados en Padre Alonso García s/n, comuna de Alto del Carmen.

Que narra que su representada comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la demandada a partir del 11 de octubre del año 2016, prolongándose la vinculación hasta el día 31 de diciembre del año 2020, realizando en primer lugar la labor de coordinadora para la Dirección de Desarrollo Comunitario “DIDECO” hasta el 31 de diciembre de 2018, y luego desarrollándose a contar del 1 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2020, en la Dirección Jurídica, todo en virtud de múltiples contratos de honorarios, pero siendo su cargo evidentemente estable, permanente e indispensable en la organización jerárquica de la Municipalidad, encontrándose además sujeta a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando y deber de obediencia en el desempeño de sus funciones, configurando en la realidad una relación laboral y no una contratación a honorarios, como se denominaban en el papel.

Que argumenta el 31 de diciembre del año 2020 la Municipalidad despidió a su representada de manera irregular, faltando a todo requisito legal, no señalando con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación laboral; no indicando ninguna causal legal



de las contenidas en el Código del Trabajo y sin acreditar los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; entre otras irregularidades, notificándose 3 de diciembre del año 2020, de manera verbal, que cesaba en sus funciones a contar del 31 de diciembre de 2020.

Que alega no habiendo sido su clienta contratada como funcionaria en ninguna de las categorías dispuestas por la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, debido a que no ingresó a prestar servicios en la forma que esa normativa establece, esto es, planta, contrata o suplente, y siendo persona natural, tampoco se encontraba sometida a algún estatuto especial de aquellos que aplican en la Institución, de forma que, a pesar de las labores genéricas descritas y que fue contratada bajo la norma del artículo 4° de la Ley N°18.883, sus labores nunca fueron accidentales, habituales o específicas, como dicha normativa exige. Habiendo percibido como última remuneración la suma de \$1.501.644 pesos líquidos, sin habersele enterado jamás cotizaciones previsionales, lo que necesariamente debe acarrear la nulidad de su despido.

Que exige, por todo lo relatado, que se declare que entre el demandado y su representada existió una relación de carácter laboral desde el día 11 de octubre del año 2016 hasta el día 31 de diciembre del año 2020, que los servicios prestados en favor de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, desde el día 11 de octubre del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2020 fueron continuos, y que con motivo del despido ilegal y arbitrario del que fue víctima su clienta, la demandada sea condenada al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios correspondientes a 4 años, el recargo del 50%, feriado legal equivalente a 84 días y feriado proporcional equivalente a 4 días; cotizaciones impagas durante todo el periodo que

duró la relación laboral, y las que se deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que comparece doña Stephania Andrea Leyton Rojas, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, oponiendo en primer término la excepción de falta de legitimación activa de la demandante y pasiva de su representada, al encontrarse en la realidad unidas por un vínculo de naturaleza estatutaria, propia del Ámbito del Derecho Público Administrativo y no como se alega a través de un contrato de trabajo, siendo fácticamente imposible que la Municipalidad proceda a su contratación laboral, en virtud del principio de legalidad.

Que, al efecto, explica que la actora fue contratada a base de un contrato de honorarios, en atención a su calidad de profesional en el área requerida por el convenio suscrito entre la Municipalidad y el Servicio Nacional de Menores, por lo que nunca existió un contrato de trabajo, resultando absolutamente improcedente la acción impetrada y careciendo su representada de legitimación pasiva, al no detentar el carácter de “empleador” respecto de la demandante y carecer esta última de legitimación activa, al no tener la calidad de “trabajador” conforme al régimen laboral.

Que, en subsidio, contesta la demanda, señalando que la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen suscribió convenios de colaboración con el Servicio Nacional de Menores, en conformidad al artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, denominado “Convenio para la ejecución del programa OPD Oficina de Protección de los Derechos de los Niños (as) y Adolescentes”, celebrado con fecha 24 de julio del 2015, aprobado mediante que por Resolución Exenta N°162, de fecha 07 de agosto del 2015; así como su prórroga por Resolución Exenta N°282 de fecha 16 de agosto del 2018, hasta el 24 de julio del 2021, y en este sentido, se habría solicitado la prórroga del contrato de la señora Cataldo

hasta el 24 de mayo del 2021, momento en el que finalizaría el periodo de la actual Alcaldesa.

Que expresa el referido convenio establece la obligación del Servicio Nacional de Menores de transferir recursos con la finalidad de contratar a los técnicos y profesionales para la ejecución del programa, dándose de esta manera origen al contrato celebrado, el que debía regirse por lo estatuido en el instrumento antes mencionado, tal como lo señala el artículo 4° de la Ley 19.883.

Que agrega es efectivo que la actora prestó servicios a honorarios para la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, específicamente, como “Coordinadora de la OPD” desde el 11 de octubre del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2020, para el convenio con SENAME, denominado “*Convenio para la ejecución del Programa OPD*”, percibiendo por dicha labor honorarios brutos ascendentes al día 31 de diciembre del 2020, a la suma de \$1.501.644, finalizando la relación jurídica el día 31 de diciembre de 2020, al haber hecho entrega la demandante de manera unilateral de sus medios de trabajo, y dejando de contestar los correos electrónicos, además de no presentarse a las reuniones de coordinación.

Que además destaca que la relación jurídica que unió a su representada con la señora Cataldo, surge en el marco de un régimen de carácter civil donde predominó un pleno equilibrio entre las partes en torno a las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente, y en este sentido al momento de suscribirse el contrato, su representada no se encontraba ejerciendo potestad o autoridad, lo que se ratifica al contener el referido convenio una serie de beneficios en favor de la demandante, tales como las vacaciones y que durante el año 2020, la actora cumplió labores remotas desde su domicilio, sin ninguna imposición de cumplimiento de horario o marcaje, dando estricto cumplimiento a las



directrices del convenio en conformidad con el contrato de prestación de servicios.

Que expone es necesario tener presente que la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen como órgano del Estado, se encuentra sometido al principio de legalidad que consagran los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y no se encuentra autorizada para contratar personal regido por el Código del Trabajo, sino solo para hacerlo mediante contratos de prestación de servicios a honorarios, y en este caso, la contratación sucesiva de profesionales a honorarios –como es el caso de la demandante– no le confieren la calidad de funcionaria pública, por lo que tampoco es aplicable el estatuto laboral de forma supletoria en las materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos, en la medida que la actora no tiene la calidad de funcionario o trabajador de su representada, sino aquella contratada sobre la base de honorarios de acuerdo con el artículo 11° del referido Estatuto Administrativo.

Que arguye respecto a los indicios de la relación laboral, que la existencia de un horario determinado en el cual debía prestar sus funciones la actora constituye una situación lícita y lógica, que permite que el acreedor de los servicios pueda establecer un determinado horario en el cual se ejecuten las labores pactadas, encontrándose válidamente establecido en el contrato de honorario firmado por la señora Cataldo; y que en lo referente a la subordinación, explica que las contrataciones de este tipo obedecen a la consecución del interés público y el bien común, donde el producto del trabajo ejecutado pasará a formar parte del patrimonio público con miras al cumplimiento dicho interés o finalidad, siendo el control respecto del estado de avance de las labores ejecutadas por la demandante solo la representación del cumplimiento de las labores que la ley les ha encomendado, existiendo supervisiones por parte de SENAME y no solo de su representada; que además el principio de legalidad

y eficiencia en la Administración no permite calificar o asimilar esta potestad a la subordinación laboral, pues para la satisfacción de las necesidades públicas los órganos de la Administración del Estado están dotados de un conjunto de potestades que no arrancan de la voluntad administrativa, sino que del legislador y es así como dichas exigencias de eficiencia y eficacia –como obligaciones jurídicas– implican sujeción al control jerárquico al que deben someterse las autoridades administrativas y los funcionarios públicos cuando ejercen sus funciones dentro del ámbito de sus competencias, lo que comprende la supervigilancia sobre la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos legalmente establecidos tanto para la organización en su conjunto y que la supuesta remuneración no sería otra cosa que la contraprestación por los servicios profesionales entregados, habiendo la demandante emitido durante todo el periodo contratado con la Municipalidad boletas de honorarios electrónicas, conforme da cuenta el Servicios de Impuestos Internos.

Que en lo que respecta al despido alegado, sostiene que este nunca fue tal, sino que la demandante no concurrió a sus labores el día 4 de enero del 2021, siendo ella a través de una serie de hechos, así como a través de un anuncio verbal al equipo OPD, quien dio cuenta de su renuncia efectiva desde el año 2021, no habiéndosele despedido el 3 de diciembre de 2020, al no existir ninguna intención por parte de la Corporación de poner término al contrato de prestación de servicios, lo que se demuestra en la solicitud y aprobación de la prórroga en la contratación de todo el equipo hasta el 24 de mayo del año en curso, fecha en que terminaba el mandato de la actual alcaldesa, y habiendo firmando la demandante el anexo de contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, haciendo uso de sus vacaciones con posterioridad al 03 de diciembre del 2020, todo lo que prueba la falsedad de las aseveraciones de la demandante en su libelo.



Que en lo que se relaciona con la nulidad del despido alegada, expresa que dicha sanción se encuentra establecida para aquel empleador que no hubiere enterado las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, aplicándose entonces solo a aquellos casos en que se haya pagado una remuneración y no las cotizaciones que se le retuvieron al trabajador, lo que en ningún caso puede aplicarse al caso de marras, donde la demandada nunca retuvo cotizaciones pues actuaba en la convicción de no pagar remuneración.

TERCERO: Que el día 13 de abril de 2021 se lleva a efecto la audiencia preparatoria, en la que tras fracasar la conciliación, se establecen como hechos a probar: efectividad de haber prestado la actora servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada, en caso afirmativo, las estipulaciones contractuales, la naturaleza, la duración del mismo, fecha de inicio de la relación laboral, fecha de término de la relación laboral, las labores, la jornada y las remuneraciones. Efectividad de que la demandada despido a la actora, en caso afirmativo, fecha de la desvinculación, efectividad de haberse cumplido con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo, y en caso afirmativo de lo último, efectividad de haber invocado causal legal y hechos en que se funda la misma. Efectividad de adeudar la demandada a la demandante cotizaciones previsionales y feriados, en el caso afirmativo, periodos y montos. Efectividad de poseer la demandada y la demandante legitimidad activa y pasiva en este proceso.

CUARTO: Que los días 27 de mayo, 6 y 11 de junio de 2021 se realizan las audiencias de juicio, quedando la fecha de comunicación del fallo para el día 30 de junio de 2021.

QUINTO: Sobre la excepción de falta de legitimidad activa y pasiva.

Que la legitimación puede ser definida en un modo amplio como *“el hecho de determinar a los sujetos de una relación jurídico-procesal concreta”*, pudiendo agregarse la idea que *“se ha identificado a la legitimación activa (en este sentido amplio orientado a la relación procesal) como aquella condición que ostenta quien afirma la titularidad de una relación jurídica y la legitimidad pasiva sería la posición que determina que, en juicio, efectivamente se encuentra la persona titular del derecho u obligación que se demanda”*. (Proceso Civil. Normas comunes a todo procedimiento. Gonzalo Cortez Matcovich y Diego Palomo Vélez. Año 2018. Editorial Legal Publishing Chile).

SEXTO: Que siendo lo alegado por la demandante el reconocimiento de la calidad jurídica de su contratación bajo el régimen del Código del Trabajo, vinculación jurídica que se acepta en la contestación de la demanda, pero respecto de la cual se alega su pertenencia a las normas del derecho estatutario que rige al Municipio, la excepción no puede prosperar, al fundamentarse en el desconocimiento de la calidad jurídica de la relación contractual, mas no en el desconocimiento de la existencia de esta, discusión que pertenece al fondo del conflicto jurídico, motivo que necesariamente lleva al rechazo de la excepción.

SEPTIMO: Sobre el fondo del asunto.

Que siendo reclamado la declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y otras prestaciones laborales, necesario entonces es analizar cada uno de estos acápite por separado.

OCTAVO: Sobre la declaración de relación laboral.

Que el contrato de trabajo se encuentra definido en el artículo 7° del Código del ramo que dispone: *“...es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar*



servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”, doctrinariamente, en consecuencia, se ha establecido que para determinar la existencia de una relación que deba ser protegida por el estatuto laboral se requiere verificar la existencia de servicios personales, contraprestación pecuniaria y vínculo de subordinación y dependencia, siendo irrelevante entonces –al encontramos con estos elementos en una vinculación entre dos personas– la calificación que las partes hagan de dicho nexo.

NOVENO: *De la prestación de los servicios.*

Que reconociéndose la vinculación que unía a las partes litigantes, se acompañaron a estos autos copias de los contratos de honorarios suscritos entre las mismas, a saber, contrato de fecha 14 de octubre de 2016, el que establece como plazo para la prestación de los servicios de la actora a la demandada desde el 11 de octubre al 30 de noviembre de 2016; contrato de fecha 15 de diciembre de 2016, que establece la prestación de los servicios desde 1 al 30 de diciembre de 2016; contrato de fecha 17 de enero de 2017, que determina la prestación de los servicios desde el 3 de enero al 31 de diciembre; contrato de fecha 19 de enero de 2018, que dispone la prestación de los servicios de la demandante desde el 2 de enero al 31 de julio de 2018; contrato de 14 de agosto de 2018, que dispone la prestación de los servicios desde el día 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018; contrato de 2 enero, que establece las prestaciones desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 2019; contrato de 2 de enero, estableciendo que las prestación de servicios desde dicha fecha hasta el 5 de diciembre de 2020, y finalmente, anexo de contrato de fecha 22 de diciembre del 2020, que prorroga las funciones hasta el día 31 de diciembre de 2020.

DÉCIMO: Que si bien de la lectura de los documentos referidos se desprende que estos fueron modificados en su redacción a través de los



años, es posible constatar en aquellos suscritos con fecha 14 de octubre de 2016, 15 de diciembre de 2016 y 17 de enero de 2017, la existencia de conceptos tales como horarios establecidos, forma de pago de horas extraordinarias, y en el caso del último de los mencionados, feriados legales, así como la obligatoriedad de firma del libro de asistencia, e incluso estableciendo como causal del despido el incumplimiento de lo dispuesto en el convenio suscrito.

Que, por su parte, en aquellos suscritos con fecha 19 de enero de 2018 en adelante, se expresan conceptos tales como horarios de entrada y salida, horario de colación, días administrativos, feriados, además de establecer la cantidad de días que se puede faltar sin justificación, e incorporando en su cláusula décimo primera, un concepto asimilable a horas extraordinarias, en el caso de prórroga de las labores fuera del horario del trabajo.

Que, por último, en todos estos instrumentos se establece como funciones a desarrollar por la parte demandante la de “coordinadora de Programa OPD”.

UNDÉCIMO: Que del mérito de los antecedentes descritos en el considerando noveno, es posible constatar la entrega por parte de la señora Cataldo de un servicio personal, consistente en la coordinación del programa denominado OPD, desarrollada de manera ininterrumpida desde el día 11 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2020.

DUODÉCIMO: *Sobre la contraprestación de los servicios.*

Que habiéndose constatado la presencia de servicios personales desarrollados por la actora en favor de la demandada, se ha presentado a los autos por la misma parte una serie de boletas emitidas desde octubre a diciembre de 2016; enero a diciembre de 2017; enero a diciembre de 2018; enero a diciembre de 2019 y de enero a diciembre de 2020, siendo estos elementos probatorios más que suficientes para tener por acreditado

que la señora Cataldo recibió durante todo el periodo en que se desarrolló como coordinadora del programa OPD una retribución en dinero, lo que además se corrobora con los documentos consistentes en los decretos de pago N°2001 de 27 de octubre, N°2283 de 29 de noviembre, N°2545 de 27 de diciembre, todos del 2016, N°96 de 31 de enero, N°290 de 28 de febrero, N°503 de 29 de marzo, N°714 de 25 de abril, N°927 de 24 de mayo, N°1222 de 21 de junio, N°1594 de 25 de julio, N°1938 de 24 de agosto, N°2315 de 26 de septiembre, N°2692 de 24 de octubre, N°3031 de 23 de noviembre, N°3483 de 20 de diciembre, todas del 2017, N°261 de 25 de enero, N°684 de 21 de febrero, N°1074 de 29 de marzo, N°1550 de 25 de abril, N°2158 de 25 de mayo, N°2622 de 25 de junio, N°3114 de 27 de julio, N°3648 de 29 de agosto, N°4214 de 26 de septiembre, N°4818 de 26 de octubre, N°5453 de 26 de noviembre, N°6095 de diciembre, todas del 2018, N°216 de 25 de enero, N°714 de 27 de febrero, N°1224 de 26 de marzo, N°1748 de 25 de abril, N°2241 de 29 de mayo, N°2773 de 25 de junio, N°3272 de 24 de julio, N°3826 de 28 de agosto, N°4408 de 27 de septiembre, N°5009 de 29 de octubre, N°5428 de 28 de noviembre, N°6061 de 19 de diciembre, todas del 2019, N°242 de 29 de enero, N°747 de 26 de febrero, N°1240 de 27 de marzo, N°1607 de 28 de abril, N°2057 de 28 de mayo, N°2502 de 25 de junio, N°3099 de 29 de julio, N°3546 de 31 de agosto, N°4080 de 29 de septiembre, N°4563 de 29 de octubre, N°5052 de 27 de noviembre, N°5560 de 29 de diciembre, todas del 2020, que acredita que todos los pagos fueron realizados por la demandada, Municipalidad de Alto de Carmen.

DÉCIMO TERCERO: *Sobre el vínculo de subordinación y dependencia.*

Que este elemento puede configurarse de diversas maneras en las relaciones laborales, siempre que existan indicios que el trabajador se encuentra efectivamente bajo el poder de mando y dirección del empleador en el desempeño de sus funciones.

Que sin perjuicio de lo declarado por la testigo señora Camila Osorio Cortés, quien expone que las labores del equipo de la OPD eran fiscalizadas por el Servicio Nacional de Menores, es posible constatar de la cláusula séptima de la Resolución Exenta que aprueba el Convenio entre la I. Municipalidad de Alto del Carmen con en Servicio Nacional de Menores, que precisamente esta última institución no posee relación alguna con las personas que se contraten con la finalidad de dar cumplimiento al referido convenio, lo que sumado a las estipulaciones a las que se hicieron alusión en el considerando noveno, y pruebas acompañadas, tales como copia del Libro de Asistencia perteneciente a la Municipalidad, en donde constan las firmas de la demandante por el mes de enero de 2017, formulario de obligación de informar perteneciente a la Municipalidad, en donde consta la firma de la demandante de fecha 19 de diciembre de 2019 y formulario de recepción de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, firmada por la demandante con fecha 19 de diciembre de 2019, es posible constatar que la actora debía obedecer a las instrucciones impartidas por la autoridad municipal, tales como horarios fijos de trabajo, solicitud de días administrativos, o respeto en los horarios de colación, lo que se aleja de una relación contractual de honorarios, que se caracteriza por la autonomía que posee el prestador del servicio de cumplir con sus obligaciones con libertad horaria y en la forma que más estime conveniente.

Que en nada altera lo concluido, las alegaciones de legalidad expresadas en la contestación de la demanda sobre el acuerdo de voluntades entre las partes litigantes– en orden a suscribir un contrato de honorarios– pues las estipulaciones contractuales plasmadas en los contratos de honorarios no revisten las características de una contratación libre del poder de mando del empleador, motivo por el cual la denominación que den las partes del mismo se vuelve irrelevante frente a la realidad fáctica estampada en los convenios suscritos.



DÉCIMO CUARTO: Que en lo relativo a la defensa argüida por la Municipalidad, en la que se expone que la actora se encontraba vinculada con el municipio bajo lo establecido en el artículo 4° de la Ley 18883, esta será igualmente desechada al disponer la normativa en comento que: *“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde.*

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”; pues con el solo valor de la prueba documental aportada por la propia demandada y ya analizada en el considerando noveno, se desprende la continuidad de los servicios prestados por la actora por años, los que lejos de variar se mantuvieron inalterados, motivo que lleva a descartar de plano la idea que la contratación de la señora Cataldo haya sido para labores accidentales, o no habituales, o poder definírsele como algún cometido específico.

DÉCIMO QUINTO: Que en virtud de todo lo analizado es que se dará lugar a declarar que la vinculación entre la señora Cataldo y la I. Municipalidad de Alto de Carmen constituyó en los hechos una relación

laboral, debiendo aplicarse a su respecto las normas del Código del Trabajo.

DÉCIMO SEXTO: *Sobre el despido injustificado.*

Que dándose lugar a la declaración de la relación laboral, se hace procedente entonces analizar las circunstancias en que ocurrió la separación de la trabajadora demandante.

Que al efecto la actora reclama en su libelo haber sido desvinculada de manera verbal el día 3 de diciembre de 2020, momento en que se le comunicó que trabajaría hasta el día 31 de diciembre de dicho año, negándose por la demandada tal hecho, señalando que la empleada nunca fue despedida, sino que, por el contrario, fue ella quien se desvinculó de su trabajo, haciendo entrega de su equipo de computación y saliéndose de los grupos de coordinación creados en la red social WhatsApp.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que existiendo en la causa dos teorías del caso de como ocurrió la separación de la trabajadora, necesario es señalar que cada parte se encuentra en la obligación de acreditar sus alegaciones, siendo insuficiente para acoger cualquiera de las teorías expresadas la sola aseveración hecha en los escritos de discusión.

Que, en este orden de ideas, la parte demandante presenta como prueba del despido el testimonio de la señora Alice Pizarro López, quien se desempeñó también para el Municipio, declarando que por un tiempo coincidieron ambas trabajadoras en las labores desarrolladas para la demandada, expresando respecto al punto en conflicto que la actora fue desvinculada *“de la misma manera en que lo fui yo”*, pero reconociendo desconocer fecha y funcionario que realizó el despido de la señora Cataldo, sin dar entonces fundamento del supuesto conocimiento sobre lo declarado. Que asimismo se presenta la propia señora Cataldo, quien asegura en su confesional haber sido desvinculada por la Municipalidad.

DÉCIMO OCTAVO: Que no existiendo ningún antecedente probatorio anexo, además de los referidos, no es posible tener por acreditada la existencia del despido reclamado, al desconocer la testigo señora Pizarro antecedentes que permitan acreditar que la afirmación sobre la desvinculación de la señora Cataldo sea algo más que una suposición suya basada en su experiencia personal, conclusión a la que se arriba además por el hecho que –según su misma declaración– la testigo se habría desvinculado de la demandada en diciembre de 2019, es decir, un año antes de la separación de la demandante, no siendo dable entender que efectivamente hubiera tenido conocimiento de dicha circunstancia de manera personal y directa, todo lo cual le resta mérito probatorio a la declaración prestada. Que otro tanto ocurre con la ponencia de la propia demandante, siendo insuficiente su sola afirmación para tener por probado este punto, y teniendo en cuenta además que el segundo de los testigos por dicha parte presentado, el señor Daniel Eduardo Aróstica Gahona, no hace ni siquiera alusión a los motivos de separación de la demandante, expresando incluso desconocer la fecha de esta.

DÉCIMO NOVENO: Que habiéndose argüido por la Municipalidad la intención de continuar con la contratación de la señora Lorena Cataldo hasta el día 24 de mayo de 2021 –lo que descartaría la teoría de la demandante de haber sido despedida por esta institución– dicha parte acompaña correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, emanado de la Directora Jurídica señora Stephania Leyton, en donde se plasma la decisión edilicia de prorrogar la contratación de todo el equipo OPD hasta el día 24 de mayo de 2021, lo que además resulta concordante con pantallazo WhatsApp de 4 de enero de 2021, donde se hace alusión a dicha continuación, y corroborado por lo expuesto por los testigos presentados por la demandada, señora Camila Osorio Cortés y Paolo Lobos Guaita, ambos contestes en el hecho que la voluntad de la alcaldesa en

ejercicio era mantener el equipo completo hasta la referida fecha, en la que ella cesaba igualmente en el cargo.

Que con la finalidad acreditar el retiro voluntario de la señora Cataldo, se adjunta correo electrónico de la misma Directora Jurídica, de fecha 8 de enero de 2021, en donde se le consulta a la demandante de las razones de la entrega del equipo de Notebook y abandono de redes sociales de coordinación del equipo de trabajo; constancia de la entrega del referido equipo con fecha 4 de enero de 2021, y el mismo pantallazo de WhatsApp ya referido, donde es posible visualizar la salida del grupo de la actora, realizada el mismo día 4 de enero de 2021.

VIGÉSIMO: Que si bien de los documentos referidos no se desprende inequívocamente la intención de la actora de desvincularse de sus labores en la Municipalidad, siendo esta intención negada por la actora en respuesta al correo de fecha 3 de diciembre de 2020 emitido por la Directora Jurídica, si fue expresada la misma en la reunión de 23 de noviembre de 2020, donde queda plasmada como parte de los temas abordados, documento que aunque no se encuentra firmado por la demandante, al haber participado de dicha reunión de manera remota por la pandemia existente, no fue objetado ni alegado como falso en el proceso.

Que además la testigo señora Camila Osorio Cortés corrobora la idea de la renuncia de la actora al exponer que a partir del 4 de diciembre de 2020 la demandante *“sacó sus vacaciones y en enero no apareció mas en las reuniones”*, agregando que se retiró de los grupos de WhatsApp a pesar de la comunicación que sus contrataciones se verificarían hasta mayo de 2021, y en mismo sentido expone el señor Paolo Lobos Guaita, quien asegura haber extendido y mantenido el documento para prorrogar la contratación de la señora Cataldo hasta la referida fecha, sin que esta se



haya acercado a firmarlo, enterándose recién en enero de 2021 del hecho de que la actora no iba a reincorporarse a sus labores.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que de la suma de los antecedentes expresados, es de parecer del tribunal que la Municipalidad pudo acreditar que su voluntad era prorrogar la contratación de todo el equipo OPD hasta el 24 de mayo de 2021 –lo que incluía a la demandante– la que sin mediar despido, entregó su equipo de trabajo consistente en un computador portátil y se retiró de los grupos de WhatsApp de su equipo de trabajo, siendo concordante dicha actuación con lo por ella anunciado en reunión realizada el 23 de noviembre de 2020, antecedentes todos que –sumados a la falta de prueba por parte de la demandante de la existencia efectiva de una desvinculación que haya emanado de la autoridad comunal– permiten arribar a la convicción que fue decisión unilateral de la señora Cataldo separarse de sus labores, lo que impide acoger la teoría de la ocurrencia de un despido, considerando que lo realmente acontecido fue una renuncia voluntaria por parte de la actora, lo que no conduce al pago de las indemnizaciones que por esta acción se demandan, ni permite la aplicación de la sanción de nulidad del despido, todas instituciones que tienen como base la existencia de una decisión unilateral del empleador en orden a desvincular al trabajador de sus labores.

VIGÉSIMO SEGUNDO: *Sobre las prestaciones demandadas.*

Que, sin perjuicio de negarse las indemnizaciones asociadas al despido, habiéndose declarado existencia de relación laboral conforme consta del considerando décimo quinto, se dará lugar al pago de las cotizaciones previsionales que debieron enterarse durante la relación laboral, al ser una obligación que se reconoce como no cumplida por la misma demandada, durante el tiempo que perduró la vinculación entre las partes litigantes.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en lo referente al feriado reclamado, es importante señalar que esta prestación no es de aquellas que vienen unidas con la acción de despido injustificado, en el sentido que es de cargo de la parte que la peticiona expresar de manera clara sus fundamentos, en especial el monto y los periodos que se reclaman, de forma tal que le entreguen al juez los elementos mínimos para poder calcular esta prestación, limitándose la demandante –en el caso de marras– a señalar un número de días que supuestamente se le deberían por concepto de feriados legal y proporcional, sin expresar adecuadamente el cómo se arriba a dicha cantidad.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, a pesar de la no fundamentación de esta última petición, y habiendo trabajado la actora desde octubre del 2016 a diciembre de 2020, tenía derecho, conforme lo establecido en el artículo 73 del Código del Trabajo, a 15 días de vacaciones por año, a contar del noviembre de 2017, lo que en virtud del periodo trabajado arroja un total de 45 días, dándose cuenta con los documentos consistentes en solicitudes de feriado de 30 de junio, 13 de julio, 7 de septiembre del 2017; 1 de febrero, 9 de febrero, 24 de mayo, 28 de junio y 5 de noviembre del 2018; 21 de enero, 6 de mayo, 6 de junio y 8 de octubre del 2019, que la demandante si hizo uso de este derecho por dicha cantidad de días, denegándose por lo mismo, los montos demandados en este acápite.

Que en lo que respecta al feriado proporcional, no acreditándose el uso del mismo por parte de la demandada, se accederá por el total de 3 días, lo que atendido la última remuneración líquida percibida por la demandante –a la que debe adicionarse lo que se debió descontar por cotizaciones de seguridad social– equivale a la suma de \$160.826.– monto por el que se condenará a la demandada por este concepto.



VIGÉSIMO QUINTO: Que el resto de la prueba aportada consistente en credencial institucional de la Municipalidad; certificado emitido por Carmen Bou Bou para Lorena Cataldo Muñoz, con fecha 13 de abril de 2018; constancia emitida por Paola Rojas Contreras, para Lorena Cataldo Muñoz, con fecha 4 de enero de 2021, correos electrónicos de fecha 7 de agosto de 2018, con fecha 10 de marzo de 2020; 16 de marzo de 2020; de 10 de julio de 2020; 11 de septiembre de 2020; 2 de octubre de 2020; 10 de noviembre de 2020; de 6 de noviembre de 2020; de 17 de noviembre de 2020; 15 de noviembre de 2018; informes de desempeño y realización de actividades, realizados por Lorena Cataldo para la Municipalidad correspondiente a los períodos octubre a diciembre inclusive de 2016; enero a diciembre inclusive de 2017; enero a diciembre inclusive de 2018; enero a diciembre inclusive de 2019; enero a diciembre, inclusive de 2020, informes de fechas 20 de octubre, noviembre y diciembre del 2016; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y análisis por cuenta comprobantes desde enero hasta diciembre del 2016, enero hasta diciembre del 2017, enero hasta diciembre del 2018, enero hasta diciembre del 2019, y enero hasta diciembre del 2020 y Memorándum N°50 a Paolo Lobos de Stephania Leyton, en nada altera lo concluido al ser sobreabundantes a las pruebas sobre la naturaleza de la relación que unía a las partes litigantes, y los antecedentes consistentes en Resolución N°162, de fecha 07 de agosto del 2015, que aprueba el Convenio con la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen relativo al Proyecto denominado OPD- Comuna de Alto del Carmen; Carta N°230 de

fecha 11 de junio del 2018, dirigido a la señora Carmen Bou Bou representante, de don Víctor Silva Ipinza, Director Regional del Servicio Nacional de Menores; Resolución N°282, de fecha 16 de agosto del 2018, que aprueba prórroga de convenio de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen relativo al proyecto denominado “OPD-Comuna de Alto del Carmen” a ejecutarse en la Región de Atacama; formulario de presentación de proyectos Oficina de Protección de Derechos 2015-2018, correspondiente a la Ley N°20.032; permisos administrativos de fechas 17 de noviembre del 2016, 5 de noviembre, 28 de junio, 5 de noviembre del 2018, 9 de julio, 12 de junio, 28 de mayo, 7 de mayo, 21 de enero del 2019, 17 de noviembre, 4 de marzo, 13 de marzo y 17 de noviembre del 2020, por considerarse impertinentes al conflicto jurídico planteado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1, 7, 162, 446 y demás pertinentes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **se RECHAZA** la excepción de falta de legitimidad activa y pasiva deducida por la Ilustre Municipalidad de Alto de Carmen.

II.- Que **se AGOGE parcialmente** la demanda deducida por el abogado don Mauricio Ortega Berríos, en representación de la señora Lorena Elizabeth Cataldo Muñoz, en contra de la I. Municipalidad de Alto del Carmen, declarándose en consecuencia:

- Que entre las partes existió una relación laboral desde el día 11 de octubre de 2016 hasta el día 31 de diciembre de 2020.

- Que se condena a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía por todo el periodo trabajado.

- Que se condena a la demandada al pago de \$160.826 por concepto de feriado proporcional.

III.- Que **se RECHAZA** en todo lo demás la demanda interpuesta.

IV.- Oficiése a las instituciones previsionales que correspondan a fin de iniciar las acciones de cobro respectivas.

V.- Que las sumas ordenadas pagar se solucionarán con los reajustes e intereses que prescriben los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VI.- Que no habiendo resultado totalmente perdidosa ninguna de las partes, cada una se hará cargo de las costas generadas en esta sede.

La presente sentencia se entiende notificada a las partes en la fecha de su inclusión en la carpeta virtual. R

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT O-1-2021

RUC 21- 4-0316117-6

Dictada doña KERIMA SCHICHASCHWILI CARVAJAL, Jueza Titular del 2° Juzgado de Letras de Vallenar.

En Vallenar a treinta de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

